

S-2024

Procedimiento:

Demandante:

Demandada:

Radicado:

Asunto:

Ejecutivo

Minexcorp S.L.

El Porvenir Minero S.A.S.

05001 31 03 007 2022 00202 01

Confirma sentencia impugnada

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, diecinueve (19) de abril del dos mil veinticuatro (2024).

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, frente a la sentencia fechada el 18 de mayo del año 2023, mediante la cual el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín dirimió la controversia en el proceso ejecutivo por obligación de hacer -suscribir documento-, instaurado por la sociedad Minexcorp S.L. en contra del El Porvenir Minero S.A.S. Labor jurisdiccional que se acomete en el siguiente orden:

I. ANTECEDENTES

1. Demanda y pretensiones. El día **08 de junio de 2022**, la sociedad Minexcorp S.L. presentó demanda ejecutiva en contra de la entidad empresarial El Porvenir Minero S.A.S. pretendiendo que se librara mandamiento de pago en contra de esta última por la obligación de hacer contenida en el título ejecutivo presentado como base de la acción (**contrato de operación con opción de compra de fecha 28 de junio de 2.021**) y, en específico, por la obligación a suscribir el documento que se adjunta a la presente acción y que corresponde al **poder de representación** a otorgar ante la **Secretaría De Minas Adscrita A La Gobernación De Antioquia**, en su condición de autoridad minera a cargo de la supervisión y control del **Contrato De Concesión No. 315**.

Agregó que en el evento en que la parte ejecutada no de cumplimiento con la suscripción del documento presentado dentro de los tres (3) días siguientes a partir de la notificación del mandamiento ejecutivo proferido por el Despacho, se disponga el cumplimiento forzado a través de la suscripción del **poder de representación** por parte del señor Juez en los términos del artículo 434 y 436 del Código General del Proceso.

2. Como *causa petendi* asomó los hechos que a continuación se compendian:

2.1. Que Entre la sociedad **Minexcorp SL**, en condición de compradora y los señores **Juan Alberto Cano Toro** y **Nohelia Cano Toro** en condición de vendedores, fue celebrado en fecha **08 de marzo de 2.021 contrato de venta de acciones de la sociedad El Porvenir Minero S.A.S.**, mediante el cual se pretendía la adquisición del **noventa y siete (97%)** de la participación accionaria que tenían los vendedores sobre la sociedad **El Porvenir Minero S.A.S.**, entidad que tenía como actividad principal la exploración, explotación, extracción y comercialización de minerales.

2.2. Que el anterior contrato fue motivado en la condición de titular y propietaria que tenía la sociedad **El Porvenir Minero S.A.S.** sobre el **100%** de la **concesión de título minero No. L305005** con registro **RMN GNBD-01** otorgada por la Secretaría de Minas adscrita a la **Gobernación De Antioquia**, a través del cual se desarrollaba la operación industrial en el proyecto minero denominado **LA MARÍA**, ubicada en bien inmueble también de propiedad de la ejecutada y localizado entre los municipios de Vegachí y Remedios, Antioquia.

2.3. Que, mientras se perfeccionaba la adquisición de la composición accionaria, celebraron el **contrato de operación con opción de compra** de fecha 28 de junio de 2.021, el cual tenía por objeto hacer entrega de la operación minera (exploración, construcción, montaje, explotación y comercialización) del proyecto **LA MARÍA** a la aquí ejecutante. En consecuencia, la sociedad **Minexcorp SL** asumió la condición de operador directo del **contrato de concesión de título minero No. L305005**. Este fue un acuerdo privado accesorio al contrato de compraventa de acciones celebrado en fecha **08 de marzo de 2.021**.

2.4. Dentro de este último contrato destaca la cláusula séptima y décima, por medio de las cuales, la sociedad **El Porvenir Minero S.A.S.** se obligó a suscribir **poder especial** en favor de persona designada por **Minexcorp SL**, con la finalidad que éste cumpliera con las obligaciones inherentes al **contrato de concesión No. 315** y atendiera los requerimientos por parte de las autoridades mineras y ambientales.

2.5. Que la representante legal de la demandada se ha negado arbitrariamente a suscribir el poder de representación para efectos del seguimiento y cumplimiento de las obligaciones mineras que resultan necesarias para ejecutar el **contrato de operación** celebrado entre las partes, poniendo en peligro no solo el contrato de compraventa sino la inversión realizada, debido a que la operación cedida sobre

el proyecto **LA MARÍA** depende exclusivamente del cumplimiento y seguimiento de las obligaciones mineras que se derivan del **contrato de concesión No. 315**, tal como corresponde respecto de la consecución y suministro de pólizas y el reporte de los formularios básicos mineros que se exigen para la explotación minera en el país, entre otros requisitos.

2.6. La determinación prevista tanto en la **cláusula séptima**, así como en el **literal b parágrafo primero de la cláusula décima** del **contrato de operación**, entendido este último como título ejecutivo base de la acción, corresponde a una obligación clara, expresa y actualmente exigible; en consecuencia, se deberá dar continuidad al proceso ejecutivo acorde a las reglas previstas en el artículo 422, 434 y subsiguientes del Código General del Proceso.

3. Actuación procesal. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, Despacho judicial que, mediante providencia del pasado **13 de julio de 2022**, libró mandamiento de pago, en la forma solicitada, previniendo a la sociedad demandada que, de no suscribir en el término señalado el **“poder de representación para control y seguimiento del contrato de consecución de título minero n° L305005 (RMN GNBD-01)”**, procedería a suscribirlo en su nombre, como lo dispone el artículo 434 del C. G. del P.

4. Oposición a la demandada. La sociedad demandada llegó al proceso formulando recurso de reposición frente al auto que libró mandamiento de pago, para discutir la ausencia de requisitos formales y plantear excepciones previas, recurso que fue resuelto en forma desfavorable como consta en providencia del pasado 08 de septiembre de 2022 (cfr. pdf. 14).

Seguidamente, durante el término de traslado, se opuso a las pretensiones de la demanda y contestó la demanda para formular las excepciones que se dio en llamar: **i) Inexistencia por ausencia de solemnidad voluntaria o convencional pactada**, la que hizo consistir en que *“...El negocio jurídico cuya ejecución se pretende no cumple con dos requisitos de existencia: i) la solemnidad voluntaria o convencional pactada; ii) el consentimiento...”*; **ii) nulidad absoluta del contrato de operación**, puesto que, *Aunque en gracia de discusión se considere que el negocio jurídico existió, lo cierto es que el mismo es anulable absolutamente, por al menos dos motivos: i) objeto ilícito; ii) incapacidad absoluta de la sociedad Minexcorp S.L.*; **iii) Excepción de contrato no cumplido**. No hay posibilidad de

exigir satisfactoriamente la ejecución forzada de la prestación, debido a que la demandante se encontraría en estado de incumplimiento respecto de sus obligaciones, a saber: • No permiten el ingreso de los titulares al área. • Explotación no autorizada y sin contraprestación. • Se lava y beneficia mineral de otras minas, e incumplen el (testigos y videos Fernando) (sic.) • Incumplimiento de los lineamientos técnicos y financieros del Plan de Trabajos y Obras. • Desarrollo de actividades con riesgo ambiental. • Uso de explosivos sin autorización, e, **iv) inexistencia de título ejecutivo**. Merced a que la obligación cuya ejecución se pretende en el marco de este proceso ejecutivo, no cumple con los requisitos de claridad exigidos legalmente, por lo que el auto que libró mandamiento de pago es ilegal.

4. La sentencia impugnada. Agotado el trámite probatorio y legal pertinente, el juez *a-quo* profirió sentencia el pasado 18 de mayo de 2023, en la que ordenó “...Cesar la ejecución de suscribir documento” y condenó en costas a la sociedad demandante.

Para llegar a esa conclusión, comenzó por estudiar los elementos del título ejecutivo allegado, de cara a lo establecido en los artículos 422 y 430 del C. G del P, en orden a lo cual señaló que para reclamar por vía ejecutiva no puede quedar duda acerca de la certeza de la obligación y su exigibilidad. De este modo, anotó que tratándose de contratos que contienen obligaciones bilaterales, se impone al demandante demostrar haber honrado los compromisos y que sus obligaciones se encuentran satisfechas, de ahí que se trate de títulos ejecutivos complejos, por lo que correspondía escrutar de nuevo el título presentado para verificar la acreditación de los requisitos del título ejecutivo que soporte la orden compulsiva.

Se acentúa que el argumento cardinal del funcionario para ordenar cesar la ejecución se refiere principalmente a que: “...al tratarse de un contrato bilateral con obligaciones recíprocas entre las sociedades y que además se trata de varios contratos que se encuentran coligados, resulta imposible, en el escenario de un proceso ejecutivo establecer quién le incumplió a quien y cuáles fueron las obligaciones desconocidas, en tales condiciones resulta imposible determinar si la obligación contenida en la cláusula del contrato base de ejecución resulta exigible o no, porque para llegar a esa conclusión es preciso analizar si la ejecutante cumplió con anterioridad con el contrato de compraventa de acciones, es decir, si los 14 mil millones que fue el valor de aquella convención fue honrada por la demandante y de no haberlo hecho si había una causa justa que lo permitía, lo cual, se insiste no se logró probar en este juicio y en verdad que

no se podía llegar a tal conclusión porque al tratarse de un juicio ejecutivo, esa discusión no era posible plantearla ni mucho menos resolverla acá...”

Recalcó las confesiones en torno a las cuales los representantes de ambos extremos litigiosos señalaron el no cumplimiento de sus respectivas obligaciones frente al pago del precio de la compraventa de la composición accionaria por parte de la ejecutante y la respectiva cesión de acciones y firma del poder por parte de la empresa ejecutada, estructurándose una serie de incumplimientos recíprocos que impedían tener la obligación contenido en la cláusula 7ª y 10ª del contrato de operación como exigible, reiterando que si bien los contratos podrían prestar mérito ejecutivo, al contener obligaciones bilaterales se convierten en un título complejo, porque para que brote la obligación exigible a cargo del deudor, debió aportarse la prueba de que el demandante había cumplido con las obligaciones, máxime cuando se trataban de contratos coligados, cuyo cumplimiento dependía de uno y otro. A lo que sumó que tampoco se anexó el contrato de concesión número 315 para indagar los pormenores de su clausulado, omisión que pretendió ser suplida a partir del poder de representación, lo cual resultaba inaceptable de cara a la fuente de las obligaciones.

4. El recurso de apelación. la entidad empresarial ejecutante recurrió la sentencia. Así, concedido el recurso de apelación en primera instancia, el mismo fue admitido por este Tribunal, seguidamente, se otorgó el término de rigor para la sustentación, el cual describió de la forma como pasa compendiarse:

Cuestiona que el fallo bajo impugnación declaró la ausencia de los atributos de claridad y exigibilidad, asunto que ya había sido analizado a plenitud al momento de librar mandamiento sobre la ejecución de hacer en auto de fecha 13 de julio de 2.022 y, en providencia posterior, al haberse resuelto un recurso de reposición en el que se confrontaba directamente estos aspectos. Advierte entonces que “...No se trata de una nueva revisión de aspectos no considerados por el Juzgador sino que se trató de un borrón y cuenta nueva respecto a la línea argumental que se sostuvo desde el momento en que se libró orden de apremio por parte del A Quo, ignorando sus propios argumentos que estaban revestidos de plena certeza...”

Que, tal como había sido entendido preliminarmente el Juez de primera instancia, la obligación de hacer que se perseguía correspondía a una carga no sujeta a condición alguna, frente a las cuales no fue establecido por las partes algún plazo, de donde se desprende el atributo de la exigibilidad, lo cual se extrae de la misma

literalidad del clausulado del contrato de operación con opción de compra, por ende, el alcance del proceso ejecutivo se concentraba en la exigencia que tenía la sociedad **El Porvenir Minero S.A.S.**, respecto al contrato de operación suscrito por su representante legal en fecha 28 de junio de 2.021 y en la que nada tienen que ver los accionistas que en su momento vendieron sus acciones.

Asiente que “...resultaba arbitrario descender a la discusión relativa al cumplimiento o no de las demás cargas asociadas con el contrato de venta de acciones celebrado entre terceros actores, pues precisamente la expedición del poder corresponde al único medio del cual dispone la parte demandante para efectos de poder continuar con la materialización del contrato de compraventa principal, requiriendo su otorgamiento para poder sanear las obligaciones minero – ambientales adquiridas por la sociedad **EL PORVENIR MINERO S.A.S.** ante las diferentes autoridades que ejercen vigilancia sobre la minería en particular...”.

Que “...fue omitida la valoración de los elementos de prueba que obran en el expediente como medio documental y los testimonios rendidos en audiencia concentrada de fecha 18 de mayo de 2.023, medios de convicción que daban cuenta del estado de cumplimiento por parte de la sociedad **MINEXCORP SL** y el incumplimiento por parte de los accionistas de **EL PORVENIR MINERO S.A.S.**, sin ignorar que las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la negociación no debían ser materia de análisis por el Juzgador, quien debía atenerse a la literalidad de la obligación contractual y su exigibilidad...”

Que el contrato de concesión minera que echó de menos el funcionario, contiene obligaciones minero-ambientales que se encuentran expresadas en la normatividad asociada con la concesión minera y no depende de condiciones particulares que pudieran encontrarse en el contrato de concesión, tal como lo entendía el Despacho que dictó el cuestionado fallo.

Culminó señalando que erró el a quo al interpretar que en el poder se integraron elementos en exceso al contrato, por lo que “...si el documento a suscribir desbordaba el alcance de la obligación desprendida del título ejecutivo, era deber del operador judicial reconocer el derecho y fijar los límites que a bien consideraba aplicar sobre el poder de presentación suministrado en la presente acción ejecutiva, más no rechazar de plano la pretensión correspondiente...”. Esbozados de esta manera los antecedentes que dieron lugar a la decisión recurrida y las razones de disenso que sustentan la alzada, procede la Sala a desatar el recurso con fundamento en las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales. Encuentra la Sala satisfechos los requisitos o presupuestos procesales para que pueda abordarse el estudio de la apelación interpuesta por la sociedad ejecutante, no se observan irregularidades procesales que tipifiquen una nulidad, además, se les ha permitido a los apoderados de las partes exponer las razones que los llevan a sustentar su tesis dentro del término de sustentación del recurso de apelación.

2. Planteamiento del caso. Vemos que en esta oportunidad que nos convoca, el fundamento del derecho reclamado corresponde a una obligación de hacer contenida en el título denominado *contrato de operación con opción de compra* celebrado el pasado 28 de junio de 2.021, de cuya cláusula séptima, según lo alega la sociedad ejecutante, nació para la empresa ejecutada El Porvenir Minero S.A.S. la obligación de suscribir un poder de representación para efectos de que la sociedad ejecutante asumiera las obligaciones inherentes al contrato de concesión minera No. 315., lo cual no se ha cumplido y, por ello, solicita que se ordene su suscripción por la vía ejecutiva.

2.1. Recordemos que para el juez *a quo*, surgió la necesidad de conocer el estado del cumplimiento de las obligaciones que desembocaron en la celebración de ese contrato de operación, debido a que era accesorio y estaba coligado al denominado “*contrato de venta de acciones de la sociedad el Porvenir Minero*”, de este modo, encontró que se presentaba un incumplimiento recíproco siendo indescifrable por la vía del proceso ejecutivo establecer quién le incumplió a quien y cuáles fueron las obligaciones desconocidas por ambos contratantes, circunstancia que, a la postre, lesionaba la exigibilidad del título ejecutivo presentado. Por ello, el eje central argumentativo de la censura, gira en torno a la errada valoración probatoria en que se incurrió en la decisión, para ultimar que la exigibilidad de la obligación surge de la lectura del contrato de operación aportado y no es necesario deducir su existencia de interpretación del contenido de otros contratos. Agregó, que se trata de una obligación pura y simple cuyos atributos de claridad y exigibilidad ya habían salido airosos en los albores del proceso ejecutivo.

2.2. Para esta Sala del Tribunal es correcto el juicio de la sentencia de primera instancia sobre el punto. Al analizar el material probatorio de que dispone el expediente, se acompaña la determinación del señor juez, en razón a que, dadas

las particularidades de este caso, por fuerza de la gestión defensiva, era indispensable reexaminar ese contrato que la parte actora allega a modo de título ejecutivo, para determinar si colmaba o no los presupuestos concurrentes que lo estructuran como título ejecutivo con efectos de hacer cumplir por vía coercitiva una obligación (suscribir de poder), lo que generó el desenlace deducido por el dispensador de justicia.

2.3. En efecto, hoy por hoy, no es posible discutir con éxito que el control oficioso del Juez debe ser prevalente y omnímodo, como quiera que el fin del proceso ejecutivo es que se garantice y preserve, ni más ni menos, el **principio de legalidad**, uno de los pilares de nuestro estado social de derecho y que integra la noción del debido proceso como derecho fundamental. En respaldo del anterior juicio, es preciso memorar lo destacado por la H. Corte Suprema de Justicia¹:

“...la pertinencia y necesidad de examinar los títulos ejecutivos en los fallos, incluidos los de segundo grado, pues, se memora, los jueces tienen dentro de sus deberes, escrutar los presupuestos de los documentos ejecutivos, “potestad-deber” que se extrae no sólo del antiguo Estatuto Procesal Civil, sino de lo consignado en el actual Código General del Proceso...”

“Y es que sobre el particular de la revisión oficiosa del título ejecutivo esta Sala precisó, en CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, lo siguiente: “Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleológicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (artículos 228 de la Constitución Política y 11 del Código General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panorámica propia de la estructura que constituye el sistema jurídico, mas no desde la óptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada (...).” De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, está habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin límite en cuanto atañe con ese preciso tópico, el título que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como también a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo atañadero

¹ Tutela STC 3298 del 14 de marzo del 2019. Sala de Casación Civil

con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicción, ya sea a través del juez a quo, ora por el ad quem...”

Ese entendido hace arribar a la convicción de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartición de justicia material. Por tanto, así la cita jurisprudencial que a continuación se transcribe haya sido proferida bajo el derogado Código de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del Código General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitación alguna, [...] sí está habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el título que se presenta como soporte del pretense recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarle tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jurídicas de aquel no fueron cuestionadas, como también a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo atañadero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer tópico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitación o desafuero en sus funciones, máxime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (artículo 228 Superior) (...). “(...)”. “En conclusión, la hermenéutica que ha de dársele al canon 430 del Código General del Proceso no excluye la «potestad-deber» que tienen los operadores judiciales de revisar «de oficio» el «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de única, primera o segunda instancia (...), dado que, como se precisó en CSJ STC 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, «en los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los términos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el título ejecutivo (...) Sobre esta temática, la Sala ha indicado que “la orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal(...)”.

“Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempló en el inciso segundo del artículo 430 del Código General del Proceso fue que la parte ejecutada no podía promover defensa respecto del título ejecutivo sino por la vía de la reposición contra el mandamiento de pago, cerrándole a ésta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a través de excepciones de

fondo, en aras de propender por la economía procesal, entendido tal que lejos está de erigirse en la prohibición que incorrectamente vislumbró el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no podía, motu proprio y con base en las facultades de dirección del proceso de que está dotado, volver a revisar, según le atañe, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto sería colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adoptó fue la ilógica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrección, ello no podía ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primacía del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicación en la estructura del ordenamiento jurídico al efecto constituido (...).

2.4. En términos amplios, los requisitos del título -formales y de fondo-, hacen alusión a que el título obedezca a una relación real y seria, que provenga del deudor y que conste en un documento de manera expresa, clara y que sea actualmente exigible, además, que la obligación no se haya extinguido por medio del pago por cualquier otro modo extintivo previsto por la Ley, o a que no exista ningún hecho impeditivo del ejercicio de la acción o del surgimiento del derecho, los cuales deben alegarse como excepciones, acorde con el procedimiento o de la forma que en cada caso prevea la Ley. Algunos de estos aspectos estructuran medios defensivos y, por obvias razones, no son apreciables mediante la simple revisión del título, por ende, son objeto de difícil revisión *ab initio* por el juzgador, con miras a determinar si libra mandamiento de pago o no.

2.5. De ahí que, si el resultado de esa labor conduce a establecer que determinadas exigencias no se cumplen, es imperiosa, aún de oficio y al margen de la etapa procesal, la revocatoria del mandamiento de pago y las providencias que de él dependan, **así se hallen ejecutoriadas**, sin que con ello asuma la defensa oficiosa de la parte ejecutada, pues es muy conocida la doctrina de nuestro máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, de acuerdo con la cual los autos ilegales ni los errores del juez, plasmados en decisiones interlocutorias, lo obligan a persistir en el yerro: “...puesto que, como es axiomático en derecho procesal, lo interlocutorio no ata a lo definitivo; ni el error cometido inicialmente tiene que conducir a la comisión de otro...”², de esta forma se evita entonces que un eventual desacierto cometido en el pasado se mantenga y se convierta en fuente de nuevos errores.

² Sentencia de marzo 23 de 1981, con ponencia del H. Magistrado Humberto Murcia Ballén.

2.6. Precisemos en este punto, que en el proceso ejecutivo es al ejecutante a quien corresponde la carga de aportar la prueba que demuestre su condición de acreedor y de que el ejecutado realmente es su deudor, al igual que probar la existencia a su favor de una obligación que reúna las condiciones de ser: clara, expresa y **actualmente exigible**, toda vez que el mismo no pretende que el órgano judicial declare el reconocimiento o existencia de un derecho o imponga una condena o declare una responsabilidad o se pronuncie sobre la constitución de una relación, sino, que **su finalidad es satisfacer una obligación, un derecho cuya existencia no tiene discusión puesto que se encuentra determinada en un título ejecutivo, debiéndose simplemente ratificar a través de la sentencia la existencia de un derecho ya existente y que resulta indiscutible.**

3. Bajo este entendido, la imposición judicial de suscribir el poder de representación que se reclama de El Provenir Minero S.A.S. como titular de los derechos mineros (concesión minera 315 con registro RMN GNBD-01) a fin de que sea la empresa Minexcorp S.L. la que asuma las obligaciones inherentes al **contrato de concesión No. 315** y con ocasión de ello adquiera autonomía empresarial para ejecutar estudios, trabajos, obras de exploración, montaje, construcción y explotación de la mina, es una evidente derivación del género denominado responsabilidad civil contractual, por ello, este caso, por más que se resista admitirlo el togado demandante, trata sobre del ejercicio de la acción ejecutiva por **quien se afirma contratante cumplido**, porque tal es la exigencia del artículo 1546 del Código Civil que en los contratos bilaterales otorga, al contratante que se halle bajo esa calidad, la posibilidad de que ejerza dos alternativas: **la ejecución** (eficacia por la cual ha optado el demandante) o **la resolución por incumplimiento** (ineficacia).

Para el ejercicio y legitimación de cualquiera de las dos acciones el legislador exige ser contratante cumplido, ya que, como claramente puede leerse en la norma, los requisitos para una u otra opción son los mismos. Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde el siglo XIX, con apego a la ley que en casos así significa garantía para la parte enjuiciada y exige precisamente que los presupuestos previstos en la norma se cumplan con certeza, lo que, como se dijo, ineludiblemente, tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el negocio jurídico, por ello, los artículos 1609 y 1610 del Código Civil, disponen, respectivamente: *“En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos...”* (...) *“Si la*

obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya: 1a.) Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido...”.

3.1. Al respecto, tampoco puede dejarse de lado que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que el cumplimiento del contrato por parte del sedicente contratante cumplido, puede obtenerse por la vía ejecutiva o por la ordinaria, así se expresó:

Sobre este particular aspecto atinente a la manera como el contratante cumplido puede válidamente ejercitar las acciones alternativas de que trata el artículo 1546 del Código Civil, la jurisprudencia de la Corte (v. gr. G.J. CLIX, primera parte, p 306; CCXXXIV, p 678; XLIX, p 315, sentencia 023 del 7 de marzo de 2000, exp. 5319, entre otras,) ha precisado que paralela a la acción de cumplimiento (por la vía ejecutiva o la ordinaria, según el caso), **el contratante cumplido**, o que estuvo presto a cumplir, tiene en su haber -frente al contratante incumplido y a su arbitrio- la posibilidad de acudir al juez para que declare la resolución de la respectiva negociación, en orden a satisfacer su legítimo derecho a que no preserve su vigencia dicho negocio jurídico bilateral, ni por eso, a permanecer sujeto indefinidamente a las obligaciones contraídas en virtud de su celebración. Por consiguiente, como efecto de la citada disposición legal, **sólo al contratante cumplido o allanado a cumplir**, incumbe decidir si ejerce o no la acción en comento, la que coexiste, **de manera alternativa y no conjunta, con la de cumplimiento forzado, ello es claro.**

Mientras no se satisfaga ontológica y jurídicamente la prestación debida -y exigible- al contratante cumplido, éste podrá intentar la acción de resolución contractual, se insiste, en forma alternativa a la de cumplimiento, y no conjunta o a la vez (simultaneidad real de acciones), pues aquella "es opuesta o contraria al cumplimiento, por lo que mediante su ejercicio la parte que la plantee no habrá de ver realizado el objeto de la prestación, ni directa ni indirectamente ..." y que, "en el plano legal, no se supedita o subordina al derecho a obtener el cumplimiento, pues la ley, sin ninguna restricción o exigencia en uno u otro sentido, le ofrece al contratante la oportunidad para que, en frente del deudor transgresor, escoja entre la acción de cumplimiento y la de resolución del contrato" (sentencia de Casación Civil del 10 de diciembre de 1990)."³.

³ Citada en Sentencia del 22/10/2003 proferida por la Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Civil, M.P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, expediente N° 7451.

3.2. A partir de lo anterior, contrario a lo que alega el recurrente, era preciso abordar la discusión relativa al cumplimiento de las cargas asociadas con el denominado “*contrato de venta de acciones de la sociedad el Porvenir Minero...*”, pues al igual que lo señalara el funcionario de primer grado, ambos contratos son el manantial de la obligación de suscribir el poder de representación que motivó el presente litigio, de ahí que sea equivocado –como lo sugiere la parte demandante–, que deba estudiarse de forma insular la exigibilidad de la obligación contenida supuesta y únicamente en el contrato de operación minera, merced a que su tenor se encuentra trenzado a otro convenio, formando una cadena homogénea de contratos de donde deriva el derecho así reclamado.

3.3. Esta forma de estudiar la cadena de convenios que subyace el litigio, no es más que una reiteración de lo que la doctrina foránea ha denominado cadenas homogéneas del contrato, tema abordado por la jurisprudencia patria como un tipo de unión de contratos semánticamente cambiante, a saber: coligación de contratos, contratos conexos, recíprocos, interdependientes, etc, cuya estructura logra quebrar el principio de relatividad de los contratos, hasta el punto, **que las vicisitudes de uno, en mayor o menor grado, pueden repercutir en los otros**, siendo su rasgo esencial desde el punto de vista jurídico: “...que cada uno se constituye como la causa del otro...”, así lo explica la Honorable Corte Suprema de Justicia⁴:

Se edifican en un grupo de contratos con una causa autónoma pero que cumplen una función económica única, o en otros términos, confluyen en el logro de un mismo objeto, pero que su conexidad es «fundamento para imputar obligaciones de las partes, entre sí, y respecto de terceros». **La conexidad puede ser voluntaria**, cuando es prevista de esa manera, dado que es resultado del «propósito de las partes de subordinar la surte de un contrato a aquélla del otro» **o funcional**, cuando las distintas relaciones contractuales buscan lograr un fin común. Para poder hablar de coligamiento se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Pluralidad de contratos. Se requiere la existencia de, al menos, dos negocios jurídicos que cumplan los requisitos legales para su existencia y validez. b) La existencia de un nexo funcional, habida cuenta que se debe buscar la consecución de un mismo resultado

⁴ SC3978-2022. M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez.

3.4. Palabras más palabras menos, debe aparecer probada con claridad solar la conexidad, desde lo funcional –causa única o compleja- y desde lo teleológico –búsqueda de un fin común, conjunto, querido y exteriorizado por las partes, situación que aparece latente en este proceso: **i) desde lo funcional**, por cuanto la venta del 97% de la composición accionaria de la empresa El Provenir Minero S.A.S. titular de la concesión minera, le permitiría asociarse con un inversionista, en este caso Minexcorp S.L., para explorar y explotar las áreas concesionadas, nótese entonces que desde el mismo contrato de compraventa se indicó en la cláusula 4ª que para la formalización de la venta le correspondería a la asamblea general de accionistas “...aprobar la cesión del porcentaje accionario y los términos en que se hará...” (cfr. pág. 32 pdf. 04), siendo este el antecedente que motivó la celebración del denominado “...contrato de operación con opción de compra...” (cfr. pág. 34 pdf. 04), tal y como lo reconoce el mismo representante legal de la entidad empresarial ejecutante, siendo estas sus palabras al responder lo preguntado: “...nosotros firmamos tres contratos, se firmó un contrato de compraventa de las acciones de la mina y entre el tiempo que se perfeccionaba ese contrato (...) porque la empresa no estaba en condiciones de ser vendida, más con la cantidades de dinero que estábamos hablando (...) entonces lo que hicimos fue un acuerdo de un contrato de operación durante 5 años en lo que se perfeccionaba la compraventa de esas acciones, esa era la función del contrato de operación, esperar a que se perfeccionara esa venta...” (cfr. mnto 2:15 pdf. 20). **ii) Desde lo teleológico**, es claro que el inversionista Minexcorp S.L, sufragaría los gastos de inversión, construcción y montaje, explotación y exploración del área concedida, con todos los derechos y obligaciones que le eran inherentes a esa actividad y las utilidades obtenidas iban a ser distribuidas en proporción al porcentaje accionario del 3% que fue conservado por los accionistas vendedores del Porvenir Minero S.A.S.

3.5. Lo anterior explica las constantes remisiones que así hace el “contrato de operación con opción de compra” al Contrato “De Venta De Acciones De La Sociedad el Porvenir Minero S.A.S.”:

CLÁUSULA TERCERA: Pagos por concepto operación minera. El INVERSIONISTA pagará a el TITULAR por concepto de derechos de operación minera los porcentajes brutos que se establecen en el contrato de compraventa de acciones suscrito entre las partes el día **08 de marzo del 2021**, así mismo el porcentaje de pago se ira reduciendo en los términos del mencionado acuerdo teniendo en cuenta los pagos que se realicen.

CLÁUSULA CUARTA. Compra de acciones de la sociedad titular. La compra de los derechos sobre la concesión minera se materializará a través de la venta de las acciones de la sociedad titular, en consecuencia, el presente acuerdo se suscribe por los accionistas de la compañía en señal de aceptación de dicha obligación. Dicha cesión se hará en los términos establecidos en el contrato de compra venta de acciones suscrito el día **08 de marzo del 2021**.

3.6. Pero, tal vez, lo más importante es que desde la misma literalidad del contrato de operación, este se calificó como accesorio al contrato de venta de acciones al estipularse:

CLÁUSULA QUINTA.. Vigencia. El presente acuerdo tendrá la misma duración que tarde el perfeccionamiento del contrato de compraventa de acciones suscrito entre las partes el día **08 de marzo del 2021**. Las partes acuerdan que el presente contrato es accesorio al contrato de compraventa de acciones mencionado

3.7. Sin duda, el juez de la causa, al igual que lo hace ahora la Sala, echó de ver tal interdependencia y, por eso, abarcó el estado del cumplimiento de lo pactado en la venta accionaria por el inversionista para abrir paso a los efectos buscados en el contrato de operación con opción de compra, pero sin salirse del anotado espectro contractual. En tal cometido, lo único que logra evidenciarse del escaso material probatorio de que dispone el expediente, es que la desavenencia surgió entre los contratantes a partir de la forma en que cada uno entendió que debía pagarse el precio de las acciones fijado en la suma de **\$14.000.000.000**, pues mientras el señor Fernando García, representante legal de la inversionista Minexcorp SL., alude que se iría cubriendo en proporción y conforme el progreso de los trabajos en la Mina, para cuyo efecto ingresó en la zona a operarla y dispuso de una inversión importante para lo propio; por otra parte, la señora Nohelia Cano Toro, representante legal del Provenir Minero S.A.S. advierte que se quedaron esperando la consignación de aquella suma dineraria, con ese propósito, envió la carta de instrucciones autorizando el giro hacia su cuenta personal, lo que nunca ocurrió, razón por la cual se vio forzada a iniciar un amparo administrativo en calidad de titular de la concesión minera, para que desalojaran a los ocupantes de la mina, acto administrativo que salió airoso (cfr. archivo “15AnexoPruebas”. pdf. 06. 07. para los municipios Vegachí y Remedios, Antioquia, respectivamente.) resaltando que, a partir de esa falta de pago del precio de la venta de acciones, no tenía por qué firmar poder alguno.

3.8. En esto radica justamente la principal razón para enrostrar falta de **claridad y exigibilidad** del título presentado, pues a más de la falta de demostración del hecho positivo del pago, porque evidentemente no lo hubo, lo único que logra saberse con precisión es que ambos contratantes se pusieron en el camino del incumplimiento a partir de su propia manera de interpretar la forma en que debía pagarse el precio de la venta accionaria, lo que de un modo u otro repercute en la claridad de la obligación, pues, una obligación clara, es aquella en la cual se determinan nítidamente sus elementos, en este caso el objeto, es decir, **la**

prestación que debe asumir el deudor sin dar pábulo a ambigüedades o a dudas, que es lo que, si se quiere, ocurre en este caso, ya que por fuerza de todo el acontecer contractual que rige a las partes aquí enfrentadas, se requiere una interpretación adicional y distinta al tenor de lo expresado en el documento.

3.9. Todo cuanto hasta aquí se ha elucubrado, para lo que concierne al presente proceso, inhabilita al ejecutante, para reclamar de la empresa renuente, la suscripción del documento por la vía compulsiva, y menos, para que lo haga el juez en su lugar, como lo solicita en otro fragmento pretensional de la demanda, pues no solo se estaría justificando el incumplimiento de una de las partes sin causa jurídica alguna, sino que terminaría sustituyendo la voluntad del contratante para celebrar el negocio con un contenido diferente, o darle el que no tiene de manera literal.

4. De este modo, se torna lógica la improcedencia de la afirmación del censor acerca de que el clausulado del “*contrato de operación con opción de compra*” presta mérito ejecutivo *per se*, por ordenarlo así la Ley. ¡por supuesto que No! todos los documentos provengan de donde provengan, inclusive las sentencias judiciales, para que presten mérito ejecutivo respecto de una determinada obligación, deben contenerla de manera expresa y clara, **además de ser actualmente exigible**, de lo contrario no tienen dicha eficacia, no son exigibles por la vía ejecutiva. Sobre el punto valga citar el siguiente aparte doctrinal especializado:

Es de particular importancia destacar que cualquiera que sea el origen del título ejecutivo (trátese del que proviene del deudor o de su causante, del que tiene origen en determinación de autoridad jurisdiccional o de aquel al que la ley expresamente le da fuerza ejecutiva) en todos los eventos citados, el escrito correspondiente debe contener una obligación clara, expresa y exigible; **el origen del título ejecutivo en nada incide para que se requiera siempre, que el documento que la contiene presente tales características**⁵

5. En conclusión, para este proceso en particular, como no hay certeza del cumplimiento contractual por parte de la sociedad ejecutante Minexcorp. SL. necesario para que surgiera la **exigibilidad de la obligación de hacer**, bien hizo

⁵ López Blanco Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo II, Parte Especial, quinta edición, editorial ABC, Bogotá, Página 296.

el juez de primera instancia en negar el mandamiento de suscribir el poder de representación a través del cual la empresa Minexcorp S.L. asumiría las obligaciones inherentes al **contrato de concesión No. 315**, motivo por el cual se impone la confirmación de la sentencia que por vía de apelación revisa el Tribunal.

Así, sin necesidad de más consideraciones, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, el día 18 de mayo del año 2023, dentro de la presente acción ejecutiva, ello, de conformidad con las consideraciones en que está sustentada la presente providencia.

SEGUNDO. Se condena en costas de segunda instancia a la parte ejecutante, en favor de la parte ejecutada, tras la resolución desfavorable de su recurso. Para el efecto, en su momento procesal se fijarán las respectivas agencias en derecho por el Magistrado Sustanciador.

TERCERO. Cumplida la ritualidad secretarial de rigor, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado

PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
Magistrada

BENJAMIN DE J. YEPES PUERTA
Magistrado

Firmado Por:

Julian Valencia Castaño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Benjamin De Jesus Yepes Puerta
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Piedad Cecilia Velez Gaviria
Magistrada
Sala 002 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Aclaración De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **939e62a3abea28b9d9ca4426c5eb292c75379513adce872c139351fd67f091be**

Documento generado en 23/04/2024 11:17:01 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>